



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, diciembre 14 de 2022

Radicado: 05001 31 05-007-2019-00483-01
Demandante: JUAN PABLO ESTRADA ACEVEDO
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: CONSULTA DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

Atendiendo al contenido de la escritura pública 3374 de septiembre 2 de 2019 suscrita ante el Notario 9 de Bogotá, por la Cual la administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones otorga poder a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S. para ejercer la defensa judicial de la entidad, se le reconoce personería adjetiva a la sociedad mencionada, quien a su vez sustituye el poder en la Dra. LINDA SOFFY RODRÍGUEZ DAZA, quedando así investida de todas las facultades que confirió la entidad poderdante.

ANTECEDENTES

Pretende el actor el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en su condición de cónyuge supérstite, al igual que la indexación e intereses moratorios.

En sustento de sus súplicas expuso que convivió con Edilma Acevedo Jaramillo, quien ostentaba la calidad de pensionada por invalidez, unión que perduró por más de 5 años continuos y que culminó en razón de la muerte de la pensionada el 13 de junio de 2018. Prestación que al ser petitionada a Colpensiones en el año 2018, se negó bajo el argumento de no haberse acreditado el requisito de convivencia dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento de la causante.

En decisión de primera instancia, el A quo declaró probada la excepción de “Inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir”. Para ello tuvo en cuenta el acervo probatorio, donde pese a demostrarse la condición de cónyuges (página 15 archivo N°01), no se evidenció una convivencia real y efectiva, la conformación de una comunidad de vida singular, rodeada de apoyo y la solidaridad mutua, en tanto las pruebas fueron vagas, imprecisas e incurrieron en múltiples contradicciones.

Decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes, pero al ser totalmente adversa a los intereses del demandante, de ella conoce esta corporación en el grado de consulta (artículo 69 CPTSS)

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 la Ley 2213 de 2022 Colpensiones presentó escrito en el que ratifica sus argumentos de defensa a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

Encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que mediante resolución GNR 285380 del 18 de septiembre de 2015 Colpensiones reconoció a Edilma Acevedo Jaramillo la pensión de invalidez (paginas 153/160 archivo N°01); **2)** pensionada que falleció el 13 de junio de 2018 (página 17 archivo N°01); **3)** Que el 11 de octubre de 2018 Juan Pablo Estrada Acevedo solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, anunciándose como

cónyuge de la pensionada fallecida, prestación negada en resolución SUB 306890 de 26 de noviembre de 2018, bajo el argumento de no haberse acreditado el requisito de convivencia que exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 (paginas 135/139 archivo N°01) 4) también se encuentra por fuera de discusión que dada la condición de pensionada de la fallecida, la prestación de sobrevivientes en favor de los eventuales beneficiarios está consolidada, bajo las premisas del numeral 1° artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

En este orden de ideas corresponde a esta corporación determinar si hay lugar al reconocimiento de la sustitución pensional, siendo necesario determinar cuál es el tiempo de convivencia que se requiere para causarla y si el demandante cumple con el mismo.

Pues bien, dada la fecha de fallecimiento de la pensionada Edilma Acevedo Jaramillo el **13 de junio de 2018**, debe acudirse a la norma vigente para tal data, esto es la Ley 797 de 2003, que en su artículo 13 literal a, establecen la calidad de beneficiarios (as) del cónyuge y compañero (a) permanente, cuyo vínculo y unión haya perdurado por más de 5 años continuos y anteriores a la muerte del causante.

Sobre la hermenéutica de esta norma, existe divergencia de posiciones entre los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y la Constitucional, siendo necesario cumplir con los principios de transparencia y razón suficiente, exponiendo ambos criterios y haciendo explícitas las razones por las que se asume una de tales opciones:

La Corte Constitucional en sentencia SU 149 de 2021 reiteró la visión que respecto a la pensión de sobrevivientes ha adoptado, indicando que tal prestación ampara al grupo familiar que se ve afectado por la muerte de aquel con quien se tenía una relación de dependencia, evitando que la muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínima, es así que el acceso a la prestación en favor de un cónyuge o compañero (a) permanente está mediada por la demostración de un tiempo

de convivencia, como medida de legitimidad y justicia para que la prestación llegue a los miembros del grupo familiar tanto del afiliado como pensionado fallecido, decantando reclamaciones ilegítimas, así indicó la Corporación:

“55. Los requisitos previstos en este artículo y, particularmente, el del período de convivencia, tienen la finalidad de garantizar que la pensión de sobrevivientes sea otorgada a sus verdaderos destinatarios y así impedir que, ilegítima y artificiosamente, personas distintas a quienes conforman el grupo familiar logren el reconocimiento de la prestación pensional. En últimas, estos objetivos se resumen en la intención de proteger a la familia del causante y los intereses de sus miembros. De nuevo, es importante destacar que, en virtud del principio de igualdad, estas protecciones deben cobijar por igual a las familias de los afiliados y de los pensionados.

Decisión en que se reprocha el cambio de postura asumido por la Sala de Casación Laboral de la CJS en la providencia SL 1730 del 3 de junio de 2019, donde a juicio de la guardiana de la Constitución, se varió la posición que de antaño mantenía esta corporación como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y se introdujo un elemento que no prevé la norma y que comporta una afrenta al principio de igualdad al estimar que el requisito de la convivencia por 5 años solo aplicaba para los eventos de muerte del pensionado, no así cuando fallece un afiliado.

A juicio de la Corte Constitucional en la sentencia SL 1730 de 2019 no se cumplió con la carga argumentativa para abandonar la posición asumida, al igual que descalificó los razonamientos referentes a la reclamaciones ilegítimas en los eventos de muerte del pensionado, en tanto tal irregularidad también cobija las reclamaciones por muerte del afiliado, siendo aún más factible cuando se elimina la temporalidad mínima de convivencia, aunado a que tal visión afecta seriamente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Y hallando configurados los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, evidenciado una transgresión al postulado de igualdad, violación directa de la constitución, y desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia SL 1730 de 2019 y dispuso emitir una nueva decisión donde expusiera el sentido original del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 esto es, la igualdad

de requisitos para los eventos de pensión de sobrevivientes por muerte de pensionado y afiliado.

En contraste **la Sala de Casación Laboral de la CSJ** como se advirtió, en sentencia **SL 1730 de 2020** expuso que conforme a la redacción del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado.

Resaltó que tal interpretación busca evitar las uniones de última hora para el reconocimiento pensional y brindar protección a los integrantes del núcleo familiar del pensionado, aquellos con quienes se construyó un vínculo con vocación de permanencia, con quienes se forjó un destino común e incluso contribuyeron a la conformación de la pensión que aspiran sustituir.

Explicó que el trato diferencial no comporta una violación al derecho fundamental a la igualdad y por el contrario asigna un trato particular a condiciones disímiles, en tanto en el caso del pensionado, ocurrida la muerte se deja causada la prestación a sus beneficiarios, por lo que resulta legítimo que se les exija un mínimo de tiempo de convivencia, y con ello precaver fraudes al sistema pensional.

Empero esta providencia (SL 1730 de 2019) se dejó sin efectos por la sentencia SU 149 de 2021, y en razón de ello la CSJ emitió una nueva decisión, la SL 4318 de 2021 donde pese a adoptar los lineamientos de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, reiteró los argumentos para variar su posición, tal como se reflejó en el salvamento de voto.

Posición divergente que reiteró en sentencias tales como SL 5415 de 2021 y SL 5270 de 2021, donde la Corte Suprema es categórica en afirmar que la intelección adecuada del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 trae un trato disímil para la prestación reclamada por muerte de un afiliado o pensionado, ya que solo para este último evento se exige la convivencia mínima de 5 años.

De las posiciones expuesta, la mayoría de integrantes de esta sala de decisión comparte la visión que expone la Corte Constitucional, ello partiendo del propósito de la pensión de sobrevivientes como medida de reparación destinada a cubrir a la familia del fallecido, bajo cualquier modalidad que se alegue, ora por muerte del afiliado, ora del pensionado, bajo el entendido que en cualquiera de las opciones la conformación del vínculo familiar se acredita bajo una regla objetiva y general que es la convivencia por un mínimo de 5 años, sin excepciones, ya que por esta vía se permitiría que relaciones que no se generaron bajo un carácter de permanencia, sin intención de conformar un hogar sean favorecidas con una prestación que no les corresponde.

Entiende esta corporación que al eliminar el requisito de convivencia para alguno de los eventos, además de generar una transgresión al postulado de igualdad, permitiría que, la simple demostración de un vínculo matrimonial o alegación de una unión conyugal con tiempo insignificantes, incluso de días, se vieran legitimadas para reclamar y acceder a las prestaciones, bajo el entendido que si el legislador no fijó un tiempo, mal haría el intérprete judicial en establecerlo, lo que abriría la puerta a múltiples reclamaciones con serias y desafortunadas consecuencias para el sistema pensional al conceder prestaciones que no responden al sentido original de la misma.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** iniciando con las suplicas del accionante Juan Pablo Estrada Acevedo, quien se anuncia como cónyuge de la causante Edilma Acevedo Jaramillo fallecida el 13 de junio de 2018, en tanto estuvo casado con

esta desde el 23 de marzo de 2018 (página 15 archivo N°01) esto es 3 meses de unión marital, pero con una convivencia que predica desde el año 2013, para un total de 5 años y para su acreditación se presentan los siguientes elementos:

Dentro de este trámite fue escuchado **Juan Pablo Estrada Acevedo**, quien manifestó que convivía con Edilma Acevedo en el municipio de Fredonia desde enero de 2013 hasta el fallecimiento de esta, de manera ininterrumpida y que recuerda la fecha porque en esa ocasión él estaba cumpliendo 17 años, que su núcleo familiar estaba conformado por su madre, su abuela y la señora Edilma. Manifiesta que no ocultaron la relación, sino que la llevaron con un bajo perfil por los comentarios de la gente y por la edad; que contrajeron matrimonio debido a los señalamientos que tuvieron y que la señora Edilma le dijo que tomaran la decisión de estar legalmente como pareja.

Por su parte la testigo **Dora Isabel Giraldo Muñoz**, la cual señaló ser amiga de la causante por más de 20 años, que la visitaba frecuentemente, y que en una ocasión la señora Edilma Acevedo le confesó que tenía una relación con el demandante de 5 años y que se iban a casar, que vio conductas entre ellos que le permitieron concluir que tenían una relación; manifestó que la relación que ellos tuvieron duró 5 años hasta la muerte de la causante, iniciando en el año 2013, fecha que le consta porque en ese mismo año nació una nieta suya.

También se adosaron sendas declaraciones extra juicio rendidas el 18 y 20 de septiembre de 2018 por **Dora Isabel Giraldo Muñoz** y **Beatriz Elena Muñoz Atehortua**, quienes indicaron que Edilma Acevedo Jaramillo y Juan Pablo Estrada Acevedo convivieron como compañeros permanentes durante 5 años hasta el fallecimiento de aquella (páginas 25/27 archivo N°01).

Ahora bien, en el contenido del documento COLCO-133765 de 20 de noviembre de 2018 (paginas 117/130 archivo N°01), se da cuenta de la investigación que practicó Colpensiones dentro del estudio del caso, y luego de entrevistar a vecinos, los cuales afirmaron vivir más de diez años en el mismo barrio y que estos conocieron a las partes como tía-sobrino, por lo que se llegó a la conclusión de confirmar que el señor Juan Pablo Estrada no convivió con la causante, sino que esta era la tía de la mamá del solicitante y que vivían en la misma dirección pero que no eran pareja, sino familia.

Para esta corporación, lo expresado en testimonios no resulta contundente, pues si bien aluden a una convivencia permanente no ofrecen elementos que develen que sostuvieran un vínculo sentimental o inspirado por la solidaridad y acompañamiento.

Pese a demostrarse el vínculo matrimonial con escaso tiempo de formalización (3 meses previo al deceso) este no resulta suficiente para acreditar aquel que protege la prestación deprecada, como tampoco se demostró que por un espacio superior a 5 años la pareja Sobrino – Tía, haya mantenido una unión en los términos que reclama la norma e interpretada por los órganos de cierre.

Si bien se establece que las partes convivieron bajo el mismo techo, ello se debió al lazo familiar que los unía, pues la señora Edilma Acevedo Jaramillo era la tía de la madre del demandante, sin que sea desdeñable la diferencia de edad entre la pareja, pues mientras Juan Pablo relata haber iniciado una convivencia cuando tenía 17 años, ello en el año 2013, para tal data Edilma acreditaba 61 años de edad (según indica la resolución GNR 285381 de 2013 que reporta como fecha de nacimiento el 7 de marzo de 1952), sin que ninguno de los testigos ratificara la existencia de tal relación sentimental.

Del material probatorio no existe claridad sobre los extremos temporales del vínculo entre compañeros permanentes pues para la fecha en la que se realiza la declaración

extraprocesal por parte de la señora Edilma Acevedo esto es para el 16 de marzo de 2018, la causante declara bajo gravedad de juramento que llevaba 4 años de convivencia con el demandante y si se tiene que la señora Edilma Acevedo falleció el 13 de junio de 2018, la convivencia solo se acredita por 4 años y tres meses (página 23 archivo N°01).

Así las cosas, no existe mérito para declarar que el accionante cumpla con los presupuestos para ser declarado beneficiario de la sustitución pensional de la finada Edilma Acevedo Jaramillo, conclusión expuesta por el A quo y que se confirma en esta instancia. Resta por indicar que se confirma la condena en costas fijada por el A quo, las que no se causan dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA** la sentencia de primera instancia.

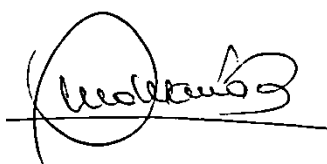
Costas en primera instancia como indicó el A quo. Sin costas dentro del grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS BONDÓN


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ
Con aclaración de voto

ACLARACION DE VOTO

Si bien me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, porque la causante Edilma Acevedo Jaramillo era pensionada y JUAN PABLO ESTRADA ACEVEDO **no acredita en el proceso una convivencia mínima de 5 años antes de la muerte**, resulta pertinente efectuar la aclaración del voto, en los siguientes términos:

La mayoría de integrantes de la Sala comparte la visión que expone la Corte Constitucional en la sentencia **SU 149 – 2021** *“partiendo del propósito de la pensión de sobrevivientes como medida de reparación destinada a cubrir a la familia del fallecido, bajo cualquier modalidad que se alegue, ora por muerte del afiliado, ora del pensionado, bajo el entendido que en cualquiera de las opciones la conformación del vínculo familiar se acredita bajo una regla objetiva y general que es la convivencia por un mínimo de 5 años, sin excepciones, ya que por esta vía se permitiría que relaciones que no se conformaron bajo un carácter de permanencia, sin intención de conformar un hogar sean favorecidas con una prestación que no les corresponde”*.

Así, se argumenta que, *“(…) al eliminar el requisito de convivencia para alguno de los eventos, además de generar una transgresión al postulado de igualdad, permitiría que, la simple demostración de un vínculo matrimonial o alegación de una unión conyugal con tiempo insignificantes, incluso de días, se vieran legitimadas para reclamar y acceder a las prestaciones, bajo el entendido que si el legislador no fijó un tiempo, mal haría el intérprete judicial en establecerlo, lo que abriría la puerta a múltiples reclamaciones con serias y desafortunadas consecuencias para la sostenibilidad financiera del sistema, pero además, al conceder prestaciones que no responden al sentido original de la misma”*.

No comparto los planteamientos esbozados por la mayoría de la Sala, básicamente por lo siguiente:

En primer lugar, a mi modo de ver, la interpretación efectuada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia SL 1730 del 3 de junio de 2020, reiterada en otras, como la CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL1905-2021, CSJ SL2222-2021 y CSJ SL5270-2021, se acompasa con la clara intención del legislador desde la expedición de la Ley 100 de 1993, al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, "*convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*", por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

A mi juicio, la distinción efectuada por el legislador en el **artículo 47 de la Ley 100** y posteriormente en el **literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003** comporta una legítima finalidad, se trata de una diferenciación que en manera alguna surge discriminatoria a la luz de lo dispuesto en el **artículo 13** de la Constitución Política, porque la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales.

En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la **condición en la que se encuentra el causante de la prestación**, aspecto que fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia **C1094 de 2003**¹ y en reiteradas sentencias de tutelareferidas a casos de pensión de sobrevivientes en los que fallece un pensionado²; oportunidades en las que, acudiendo a los antecedentes de la Ley 797 de 2003 publicados en la Gaceta Judicial 350 de 2002 Página 16, expuso la legitimidad de la exigencia de 5 años continuos al momento de la muerte **del pensionado** que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte. En efecto, es en esta circunstancia que adquiere relevancia la exigencia de un tiempo mínimo de

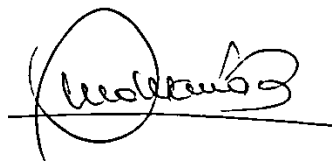
¹ Oportunidad en la que retomó los planteamientos esbozados en la sentencia **C 1176 de 2001** en la que declaró inexecutable la expresión "por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y", contenida en el literal a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,

² **T 813 de 2013, T 018 de 2014 y T 538 de 2014**

convivencia para evitar fraudes al sistema pensional, proteger el núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto.

Así, la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 referida a que se trata de una exigencia solo a los casos en que quién fallece es un pensionado, no solo proviene de la **claridad del texto** y de la **finalidad del legislador al momento de consagrarla**, sino de los planteamientos efectuados al momento de analizarse la constitucionalidad de la norma en la sentencia C 1094 -2003, los que se varían con la regla jurisprudencial definida en la sentencia **SU-141-2021**, al extender la exigencia a los eventos en que quien fallece es un afiliado, apoyándose en sentencias C-336-2014 y C-1176-2001, que en verdad, no constituyen el precedente específicamente aplicable, tal como se expone en las sentencias **SL 4318-2021 y SL 5270-2021**

Es en este contexto, que ante la actual diversidad de criterios que se presenta entre las Altas Cortes, al coincidir con la postura interpretativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia **SL 1730-2020**, y en coherencia con la postura que he dejado vertida sobre este problema jurídico, bien como ponente o en aclaraciones y salvamentos de voto según fuera el caso; efectúo esta aclaración cumpliendo así con la carga argumentativa y de transparencia para plantear de manera respetuosa el disenso frente al nuevo entendimiento que introduce la Corte Constitucional en la sentencia **SU-141-2021**.



ANA MARIA ZAPATA PEREZ
Magistrada



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-**007-2019-00483-01**

Demandante: JUAN PABLO ESTRADA ACEVEDO

Demandado: COLPENSIONES

Decisión: **CONFIRMA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 17 de enero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO